

# Crónica del mes

Septiembre

El mes de la independencia de 2001 pasará a la historia como uno de los más tensos y dramáticos. La estrechez económica y comercial con Estados Unidos cobró sus cuotas luego de los atentados terroristas en contra de los más simbólicos referentes financieros y militares de ese país. Quizás han sido las dinámicas económicas y políticas las más afectadas, directa o indirectamente, ante la amenaza del terrorismo internacional. La calma lograda luego de la lenta recuperación posterremotos se vio interrumpida a partir de la barbarie terrorista; a lo que habría que sumar los ya señalados factores preocupantes en la presente coyuntura económica salvadoreña, a saber, los bajos precios del café, el estancamiento —por no decir retroceso— de la actividad maquilera, el creciente déficit fiscal y la caída de las exportaciones. Pero, los procesos políticos, económicos y sociales salvadoreños se vieron repentinamente desplazados para prestar atención a todo lo que ocurriera en torno a las posibles represalias estadounidenses en contra de los supuestos enemigos. Desde aquel 11 de septiembre, los principales medios de comunicación desplegaron ingentes espacios, imágenes y reportajes especiales para cubrir el desenlace de los hechos. En este panorama, los pleitos al interior de las instituciones de justicia, el resquebrajamiento del FMLN, el estatuto del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) y las reestructuraciones en el partido de gobierno marcaron la dinámica política durante el mes.

Efectivamente, el 3, la Fiscalía General de la República (FGR) logró su primer triunfo judicial al lograr que un juzgado de Paz ordenara instrucción formal con medidas sustitutivas en contra de un abogado acusado de uso de documentos falsos y ejercicio ilegal de la profesión. La resolución judicial fue el primer fruto del proceso de investigación que había llevado a cabo el ex fiscal espe-

cial, Roberto Vidales. El 4, dos tribunales de San Salvador ordenaron instrucción formal en contra de igual número de profesionales de justicia. Al día siguiente, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidieron suspender el ejercicio de los abogados contra quienes se hubiere decretado instrucción, con o sin detención provisional. Los procesos judiciales en contra de aquéllos continuaron durante los siguientes días.

El 7, tres jueces de paz y un reconocido abogado enfrentaron la primera fase de un proceso en su contra. Mientras tanto, el Fiscal General de la República, Belisario Artiga, denunció que él, así como el ex fiscal especial, Roberto Vidales, habían recibido amenazas de muerte, debido a la investigación que llevaban a cabo. Artiga aseguró que detrás de las amenazas se ocultaban abogados, jueces, empresarios y hasta ex empleados de la misma Fiscalía. Finalmente, ese mismo día, la “Comisión Integral para la Evaluación Integral” de la Fiscalía detectó serias deficiencias al interior de esa institución. La investigación, que duró seis meses, determinó la existencia de una débil formación profesional entre los 726 fiscales que la integran, al tiempo que se detectaron deficiencias en la infraestructura de la misma. En la misma línea, el 8, la Asociación de Abogados de El Salvador rechazó las acusaciones hechas por la FGR por la supuesta falsedad de los títulos. El presidente de la gremial, Salvador Nelson García, además de mostrar su descontento con las resoluciones de la Fiscalía, sostuvo que todo formaba parte de un movimiento publicitario “que tiene otro fin de quienes lo han impulsado”. Entre tanto, el 13, el Fiscal General acusó a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio de Educación (MINED) de no asumir sus responsabilidades en la investigación de los títulos falsos. Asimismo, el 17, el fiscal volvió a la carga,

cuando hizo nuevos señalamientos en contra de la Corte Suprema. Esta vez la acusó de haber "filtrado" el informe realizado por Vidales sobre los títulos falsos. Hasta el 25, la Corte había suspendido en sus funciones a cuatro jueces y tres abogados, mientras se realizan procesos judiciales en su contra.

Mientras se desarrollaba el conflicto al interior del sistema de justicia, el principal partido político de oposición se enfrascaba en una lucha interna que a final de mes dejaría a dicho instituto político en una complicada situación. El llamado movimiento "Pro rescate" del FMLN reiteró, el 4, un llamado de unidad a la militancia del partido. Mediante una "carta de unidad" publicada en algunos medios, y firmada por figuras como Héctor Silva y Óscar Ortiz, alcaldes de San Salvador y Nueva San Salvador, respectivamente, dicho movimiento lanzó un llamado en pro de la despolarización del partido. Posteriormente, la prensa escrita nacional reveló los supuestos nexos entre la corriente ortodoxa del FMLN y el delegado del Partido Comunista cubano para Centroamérica, Ramiro Abreau.

El 7, Héctor Silva confirmó que había sostenido una reunión con Abreau, en Tegucigalpa, Honduras. Abreau habría mostrado el descontento del Partido Comunista cubano de que no se respaldara la candidatura de Salvador Sánchez Cerén para coordinar el partido. Como consecuencia de la reunión, Silva habría renunciado a su candidatura, lo cual supuso su ruptura con la corriente renovadora del partido. El día siguiente, la línea ortodoxa rechazó que el Partido Comunista cubano tuviera presencia en el conflicto interno del FMLN. "Tenemos cabeza propia para adoptar nuestras propias decisiones al interior de FMLN", expresó Medardo González, diputado ortodoxo.

El 11, como en cualquier lugar del planeta, El Salvador se estremeció al compás de los atentados terroristas que sacudieran los principales símbolos del poderío militar y financiero de Estados Unidos. Diferentes actores políticos, económicos y la ciudadanía salvadoreña en general pusieron de manifiesto sus reacciones y expectativas ante la inusitada tragedia. Las impactantes imágenes de la barbarie terrorista —superando el mejor estilo de Hollywood— despertaron toda clase de sentimientos en los salvadoreños, máxime cuando se comenzó a informar sobre víctimas latinoamericanas, así como de un centenar de connacionales incommunicados o desaparecidos. Se especuló sobre la muerte de miles de personas, luego de que dos

aviones de las principales compañías aéreas del mundo —*American Airlines* y *United Airlines*—, con sus pasajeros y tripulación abordo impactaran contra el complejo financiero *World Trade Center*, en Nueva York, derribando las torres gemelas. Al mismo tiempo, un tercer avión se estrellaba en el edificio del Pentágono, en Washington, el complejo de defensa más poderoso del mundo. El primer balance oficial dado por el alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, daba cuenta, hasta el 13, de 4,763 desaparecidos en esa ciudad, mientras que en el edificio del Pentágono se contabilizaban oficialmente casi 200 muertos. A ello se agregaban las 264 personas fallecidas en los cuatro aviones secuestrados por los terroristas y luego estrellados.

La primera reacción, casi unánime alrededor del mundo, fue de un rotundo rechazo y condena a las acciones violentas. En nuestro país, en un comunicado publicado horas después de la tragedia, la Presidencia de la República expresó sus muestras de solidaridad para con el pueblo y gobierno de los Estados Unidos, al mismo tiempo que condenó todo tipo de terrorismo. "En nombre del gobierno y el pueblo salvadoreño, expresamos nuestras condolencias por los centenares de familias que han perdido a sus seres queridos... Estados Unidos es el hogar de miles de salvadoreños y nos sentimos conmovidos", rezaba la nota de prensa. Al mismo tiempo, la ministra de Relaciones Exteriores, María Eugenia Brizuela, había mostrado sus condolencias al secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, durante la sesión de trabajo de la XXVIII Reunión Extraordinaria de la OEA, en Lima, Perú. Posteriormente, se sumaron a la condena otras entidades y personalidades nacionales.

La clase política nacional le dio diferentes lecturas a los actos terroristas. El presidente de la comisión transitoria del FMLN, Fabio Castillo, se adelantó, el 12, a una posible —y casi inminente— represalia militar estadounidense contra el régimen talibán en Afganistán e instó a que "se investigue y se llegue a conclusiones de quiénes son los autores materiales e intelectuales y que se les juzgue; pero que no se vaya a producir una reacción que afecte a población civil y a personas inocentes". La postura de algunos sectores del FMLN habría sido la de responsabilizar indirectamente a la administración de G.W. Bush por los atentados, en tanto que los mismos habrían sido una respuesta a la agresiva política internacional estadounidense. Más tarde, *El Diario de Hoy* se encargaría

de desplegar afirmaciones contradictorias entre figuras emblemáticas del FMLN. La opinión efemelenista contrastó con la de políticos de derecha. Para el diputado del PCN, Hernán Contreras, "Estados Unidos tiene derecho a una legítima defensa". Asimismo, el legislador de ARENA, Gerardo Suvillaga, consideró que "Estados Unidos deberá actuar bajo sus parámetros de seguridad nacional", justificando así cualquier acción bélica en contra de los terroristas.

*La Prensa Gráfica* publicó las declaraciones de otro reconocido político salvadoreño que se encontraba en Washington en el momento de los atentados. El dirigente político y ex diputado por el Centro Democrático Unido (CDU), Rubén Zamora, hizo un análisis histórico sobre la evolución de la política internacional y cómo se ha llegado a configurar un sistema de justicia internacional que pretende detener los crímenes en contra de la humanidad. En dicho análisis, el terrorismo se justificaría a sí mismo por "la globalización que corroe los fundamentos de la soberanía nacional". Pero, la pregunta fundamental de Zamora fue si el gobierno de Estados Unidos "va a tomarse la justicia por su propia mano y entrar a una espiral de actos terroristas y contraterrorista cuya víctima final, no cabe duda, serán las libertades públicas que con tanto sacrificio y esfuerzo ha construido el pueblo norteamericano a lo largo de varios siglos". En el transcurso de los días siguientes al atentado, algunas instancias políticas como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), FMLN y ARENA publicaron comunicados de prensa en los que condenaban el terrorismo y manifestaban su solidaridad para con el pueblo y gobierno de los Estados Unidos.

Una de las decisiones de la Asamblea Legislativa, como muestra de solidaridad a las víctimas del atentado, fue decretar, a partir del 13, tres días de "duelo nacional" y suspender así las celebraciones del 15 de septiembre por el 180° aniversario de la Independencia centroamericana. Sin embargo, ese día fue la ocasión que propició una mayor polarización en las reacciones a los ataques de Nueva York y Washington. El presidente Francisco Flores, pronunciando un breve discurso en la Plaza Libertad sobre la Independencia, hizo alusión directa al atentado terrorista. "Hoy nuestra libertad se ve atacada en cualquier parte del mundo, por hombres cuya única finalidad es inventar nuevas formas de guerra", declaró el mandatario.

Momentos después, un grupo compuesto por unos mil integrantes de organizaciones sindicales, gremiales de trabajadores y supuestos estudiantes universitarios montó una manifestación que culminó en la misma plaza. Algunos de los manifestantes, durante su recorrido, hicieron pintas en las cuales se leía: "Osama Bin Laden, estamos contigo", en una gesto que la prensa de derecha interpretó como una clara justificación de los atentados terroristas contra Estados Unidos. Otra frase rezaba: "quien siembra vientos cosecha tempestades". La marcha fue acompañada por el jefe de fracción legislativa del FMLN, Salvador Sánchez Cerén y otros cuatro diputados efemelenistas. Posteriormente, Sánchez Cerén aseguró que la marcha respondía a un rechazo a la resolución de la Corte Suprema de Justicia que había avalado la instalación de la base de monitoreo estadounidense en el Aeropuerto de Comalapa, lo cual, a su juicio, constituía "un golpe a la Independencia".

El 16, la cifra de salvadoreños desaparecidos en Nueva York ascendió a cien, según el Ministerio de Relaciones Exteriores; además hasta esa fecha habían sido localizados otros 50 reportados en las mismas circunstancias. Ese día, el Arzobispo de San Salvador, Mons. Fernando Sáenz Lacalle, condenó los atentados terroristas e hizo un llamado a la paz: "que el Señor le dé prudencia y sabiduría a los gobiernos para que la respuesta a estos grandes problemas llegue por senderos de paz y fraternidad". Simultáneamente, los vuelos de y hacia los Estados Unidos se normalizaron ese día en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, en Comalapa. Posteriormente, Cancillería cambió el nombre de desaparecidos por "incomunicados temporalmente".

El 19, mientras Estados Unidos iniciaba la operación militar "justicia infinita" —cuyo nombre fuera posteriormente cambiado por el de "justicia permanente"— con el envío de buques y aviones de guerra al Golfo Pérsico, los presidentes centroamericanos se reunieron en Honduras para mostrar su apoyo a la alianza internacional contra el terrorismo, dirigida por los estadounidenses. Los mandatarios acordaron celebrar tres reuniones para acelerar las acciones antiterroristas: la sesión extraordinaria de la Comisión de Seguridad de Centroamérica, la reunión de jefes de Policía y los de migración. Los presidentes, finalmente, firmaron una declaración en la que establecieron las acciones a seguir de cara al terrorismo internacional.

Por su parte, el presidente salvadoreño, Francisco Flores, puso a sus soldados a disposición de las tropas estadounidenses para un eventual conflicto bélico.

El 21, el presidente Flores reiteró, ante críticas que hicieran diputados del FMLN, que el manejo de las Fuerzas Armadas es exclusivo del Ejecutivo. "No tienen (los diputados de la Asamblea), por razones constitucionales, la conducción de las relaciones internacionales ni mucho menos el manejo de las fuerzas armadas", subrayó el mandatario. El 23, los jefes de policía de Centroamérica decidieron, en San Salvador, implementar varias medidas tendientes a enfrentar la amenaza del terrorismo. Una de las medidas adoptadas fue la pronta activación de la oficina subregional de INTERPOL en la ciudad de San Salvador.

Ese mismo día, elementos de la Fuerza Armada salvadoreña y de la Policía Nacional Civil se apostaron en el Aeropuerto Internacional de El Salvador y en el Puerto de Acajutla, desplazando a los agentes de seguridad de esos lugares para relevarlos en sus funciones. La presencia militar y policial se hizo efectiva como una medida de prevención ante el terrorismo y en consonancia con las medidas acordadas por los presidentes centroamericanos, reunidos en Honduras. "Todo es para fortalecer el aeropuerto en Comalapa y el Puerto de Acajutla", expresó el coordinador de operaciones de la Policía, Pedro González. Por su parte, el ministro de Gobernación, Francisco Bertrand Galindo, se sumó a las voces que justificaban la operación. "La parte de seguridad pública es exclusiva de la Policía y en estos momentos en que se necesita mayor control no puede dejarse en manos de seguridad privada la custodia del aeropuerto", comentó. Mientras tanto, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Aeropuerto Internacional (SITEAIES), Joaquín Campos, señaló que el gobierno habría despedido a personal de mantenimiento, descargo y seguridad.

El 25, la Dirección General de Migración de El Salvador anunció una serie de restricciones migratorias para el ingreso y tránsito de ciudadanos de por lo menos 15 países en el mundo. Los ciudadanos de Pakistán, Afganistán, India, Bangladesh, Sudán, Siria, República Popular de China, República Popular Democrática de Corea, Libia, Jordania, Irán, Irak, Egipto, Cuba y Autoridad Palestina tendrán que tramitar la "visa consultada" para utilizar el territorio salvadoreño. Al

mismo tiempo, se informó que la venta de tarjetas de turismo ya no podrá ser extendida por las aerolíneas, consulados ni la Dirección de Transporte, sino que sería emitida exclusivamente por la Dirección de Migración. La titular de esa dependencia, Nadine Albergue de Molina, expuso la facilidad con que se daba la falsificación de cédulas de identidad personal y partidas de nacimiento. "La cédula de por sí no es un documento seguro. No tenemos forma para saber si es original o no, a menos que la falsificación sea muy obvia", comentó.

Por último, el 26, un inmigrante ilegal salvadoreño en Estados Unidos, cuyo nombre es Luis Martínez Flores, fue detenido, luego de ser investigado por el FBI y acusado de brindar ayuda a los terroristas el pasado 11 de septiembre. Por su parte, el 28, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Sandoval, confirmó la presencia en el país de dos agentes del FBI quienes investigaban los vínculos de Martínez y los terroristas suicidas. Además, los investigadores estaban examinando los videos y fotografías de los participantes en la marcha del 15 en que algunos participantes dieron su apoyo a los actos terroristas. Ese mismo día, el presidente Flores reveló que se investigaba 21 cuentas bancarias en el país de igual número de personas que podrían estar vinculadas con los terroristas.

La turbulencia regresó al FMLN tras los atentados terroristas en Estados Unidos. Desde que el jefe de fracción legislativa del FMLN, Salvador Sánchez Cerén, y otros miembros de ese partido participaron en la marcha del 15 de septiembre, se desató una ola de señalamientos en contra del mismo Sánchez Cerén y, en general, contra el partido de izquierda. El jefe de bancada del FMLN había afirmado que la intención de la marcha era protestar contra las medidas económicas del presidente Flores. Sin embargo, su presencia en la marcha y la publicación del polémico comunicado "Paz mundial está en peligro" caldeó los ánimos al interior del partido.

El 26, la corriente renovadora del FMLN exigió a su jefe de fracción explicaciones sobre su presencia en la marcha que dio su apoyo a las acciones terroristas. "En ninguna parte de los estatutos del partido se dice que el jefe de fracción nos representa. Los jefes de fracción no son ningunos apoderados de los diputados", expresó el renovador Francisco Jovel. Pero, fuera del partido, las acusaciones fueron más contundentes. En un comunicado, la Asociación Nacional de la Empresa

Privada (ANEP) repudió “que entre los participantes en tales manifestaciones, se encontraran dirigentes del FMLN, quienes además ostentan el cargo de diputados a la Asamblea Legislativa y funcionarios municipales”. Pero, en el colmo de la polarización, un político de derecha rubricó un comunicado en el que sostenía que “el FMLN... ha demostrado una vez más que los terroristas son terroristas por siempre”.

Entre tanto, al cerrar septiembre, las aguas en el interior de ARENA volvieron a moverse, luego de la aparente calma tras la elección del empresario Roberto Murray Meza como presidente interino del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA). El 30, fue electa la nueva directiva del COENA, con un amplio dominio de empresarios y el desplazamiento de los integrantes de la fracción arenera en la Asamblea Legislativa. Roberto Murray Meza fue electo nuevo presidente del COENA durante los próximos dos años, al lado de otros siete prominentes empresarios salvadoreños. Murray Meza dejó clara su posición al frente del organismo directivo: “no podemos permitir que aquellos que queman las ofrendas florales y queman banderas de los países amigos lleguen a gobernarnos”. Por otra parte, miembros del grupo de los fundadores del partido —los mismos creadores de la Liga de Areneros al rescate— se sintieron defraudados de los resultados de la asamblea arenera. El “fundador” Roberto Ávila anunció la posibilidad de integrar una nueva fuerza política, mientras que para Gloria Salguero Gross, ex presidenta de la Asamblea Legislativa, “ARENA ha sido privatizado”.

En otro orden, la complicada coyuntura económica obligó al gobierno salvadoreño a realizar algunas acciones tendientes a recortar los gastos corrientes en las carteras de Estado. Además, en septiembre se sentaron las bases para la discusión y aprobación del Presupuesto General del siguiente año. Como quiera que sea, la complejidad de la situación económica vino a agravarse con los efectos directos e indirectos de las acciones terroristas en Estados Unidos. A principios del mes, los miembros del gabinete económico de Francisco Flores dieron sus puntos de vista sobre la crisis que atraviesa el sector cafetalero y sobre el plan de ahorro gubernamental. Los ministros de Hacienda y de Economía, Juan José Daboub y Miguel Lacayo, respectivamente, sostuvieron que el Programa de Rescate Y Conservación del Parque Cafetero (Ficafé), impulsado por el gobierno, sería

la única solución para paliar la crisis. Según Daboub, “los recursos son bien limitados y tienen que ser reorientados, a nuestro juicio, en las partes de salud, educación, la reconstrucción, la seguridad”. Mientras que para Lacayo “el programa del Ficafé es un programa fabuloso, un programa integral de apoyo... es indiscutiblemente el mejor programa que hay en la región”, comentó. Finalmente, el ministro de Agricultura, Salvador Urrutia, reiteró la postura de sus colegas. “La solución —subrayó— no se trata de irle pidiendo, cada vez que se presenta una coyuntura, dinero al Estado. El Estado no tiene dinero. El Estado es un administrador”.

Asimismo, contrario a las preocupaciones de diferentes sectores económicos nacionales, el gobierno siguió mostrando su confianza en que la deuda pública y el déficit fiscal son algo de lo que amerita mayor preocupación. Para el caso, el ministro de Hacienda, Juan José Daboub, explicó a inicios de mes que la deuda pública había disminuido del 40.1 por ciento del PIB en 1992 al 20.7 por ciento en 2001. Sin embargo, según cifras oficiales, hasta junio del presente año, se registró un incremento del 3.4 por ciento de la deuda, con respecto al mismo período de 2000. Instituciones como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y algunos diputados de oposición afirmaron que si bien los niveles de endeudamiento y de déficit fiscal no son alarmantes, el gobierno no debe descuidarse para llegar a situaciones inmanejables.

Al pobre desempeño del café nacional se sumó, en los últimos meses, un deterioro de la actividad maquilera salvadoreña. “Lamentablemente, la entrada en vigencia de la ICC coincidió con el inicio de la desaceleración en Estados Unidos, de manera que la perspectiva de generar más empleo no se cumplió”, expresó el director ejecutivo de la Fundación de Industrias Textiles (FUNDATEX), Alfredo Milián. El ejecutivo resumió así la situación del sector textil en el programa radial Actualidad Empresarial transmitido el 31 de agosto. Milián, acompañado de Luis Anleu, Director Ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de la Industria de la Confección (ASIC), aseguró que unos 7 mil trabajadores de las industrias maquileras han dejado de trabajar temporalmente, como consecuencia de la suspensión de órdenes de trabajo por parte de grandes importadores estadounidenses.

No obstante, ambos ejecutivos descartaron el cierre de empresas como ha ocurrido en Guatema-

la, Honduras y Costa Rica. Anleu puso toda la confianza del sector en la recuperación de la economía estadounidense. "Una vez empiece a levantarse la economía de Estados Unidos, el trabajo va a regresar a la región y especialmente en nuestro país", expresó. Posteriormente, el 4, Anleu afirmó que si para octubre la situación no tendía a mejorar habría cierre de empresas. "Un 10 por ciento de las 225 empresas de maquila peligra con cerrar operaciones debido a la poca demanda de ropa en Estados Unidos". El 5, el presidente de la Asociación Salvadoreña de la Industria de la Confección (ASIC), Francisco Escobar Thompson, aseguró que al menos el 50 por ciento de las maquilas en el país enfrentaban problemas económicos. Para el representante gremial, "en general, toda la Cuenca (del Caribe) ha perdido competitividad frente a los países asiáticos"

En este ámbito, una de las estrategias del gobierno ha sido el incremento de la inversión pública, luego de los terremotos de enero y febrero. Lo anterior sería complementado con planes de recorte en todas las carteras de Estado para beneficiar la inversión en Educación, Salud y Obras Públicas. Precisamente, sería en el Presupuesto General de la Nación para 2002 donde cristalizarían las anteriores estrategias. El 6, el presidente Flores anunció, como parte de los preparativos del Presupuesto General de 2002, que el Ministerio de Defensa sufriría un recorte de 0.5 por ciento, es decir, unos 82 millones de colones (9.37 millones de dólares). "Esperamos que nuestros gastos militares vayan bajando poco a poco, por lo menos el uno por ciento cada año o cada dos años", expresó el mandatario. Adicionalmente, las autoridades de Hacienda estimaron que para el próximo año, unos 5 mil trabajadores gubernamentales se acogerían a un decreto de retiro voluntario. Al respecto, el ministro de Agricultura, Salvador Urrutia, afirmó, el 7, que en su cartera de Estado unas 400 personas estarían interesadas en acogerse al decreto. Por otro lado, la ministra de Educación, Evelyn Jacir de Lovo, afirmó que unos 4 mil 100 empleados se acogerían al decreto señalado.

Pero uno de los principales protagonistas del desempeño de la economía nacional ha sido, precisamente, la gran empresa privada, cuya influencia había sido ratificada en agosto pasado, tras la realización del encuentro de empresarios ENADE 2001. El 10, fue electa la nueva junta directiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada

(ANEP), cuyo nuevo presidente, el empresario radial, Elías Antonio Saca, se refirió a la relación de la empresa privada con el gobierno: "somos un sector independiente, nosotros no estamos casados con el gobierno, el sector privado no es el gobierno, no es partido político".

En este marco, ocurrieron los atentados terroristas el 11 de septiembre; tras ellos, los actores económicos salvadoreños se mostraron a la expectativa sobre el futuro de la economía nacional ante el posible colapso de su principal socio comercial. En efecto, los temores a la fuga de inversiones en Estados Unidos, la paralización de las exportaciones y la especulación sobre el rumbo de la economía mundial vinieron a sumarse a otros factores adversos, tales como la prolongada desaceleración de la economía estadounidense, los altos precios del petróleo y la baja cotización del café. Por otro lado, la empresa privada, al tiempo que condenó el terrorismo, se mostró preocupada por los efectos adversos para el sector. El presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Napoleón Guerrero, expresó su temor de que la economía nacional se viera afectada. "Nos preocupa una fuga de inversionistas extranjeros en Norteamérica, lo que afectaría los beneficios que tenemos con Estados Unidos, sobre todo en lo que es la ICC".

En similares términos se expresaron los sectores directamente involucrados en intercambio con Estados Unidos. Tal es el caso de la Corporación de Exportadores (COEXPORT), que señaló una interrupción del intercambio comercial entre El Salvador y aquel país, lo cual afectó principalmente a la maquila. A ellos se sumaron las aerolíneas y agencias de viaje por las inminentes pérdidas a causa del cierre de operaciones de los aeropuertos estadounidenses. Posteriormente, el 20, ANEP estimó que, debido a los terremotos y a la incertidumbre en Estados Unidos por los atentados terroristas, la economía salvadoreña cerraría el año con un crecimiento menor al 2 por ciento; además, ANEP pronosticó que el déficit fiscal cerraría en 4 por ciento. En adición a ello, para el Banco Central de Reserva (BCR), las exportaciones salvadoreñas registraron, de enero a agosto del presente año, una tendencia hacia la baja, alcanzando un monto de mil 966.9 millones de dólares, es decir, un 1.7 inferior a lo acumulado en el mismo período de 2000.

Finalmente, las iniciativas del ministro de Hacienda, Juan José Daboub, para la aprobación del Presupuesto de 2002, encontraron una sólida opo-

sición en la bancada legislativa del FMLN, ante la necesidad de sus votos para la aprobación del Presupuesto y la emisión de bonos en el mercado. Daboub se presentó, el 26, ante los legisladores efemelenistas para explicarles que los bonos se utilizarían para la reconstrucción del país, luego de los terremotos de enero y febrero. "Es hora de definirse, o destrucción o reconstrucción", expresó enfáticamente Daboub, ante la negativa de la fracción del FMLN a que el gobierno financie parte del Presupuesto de 2002 con la colocación de bonos en el mercado. "Nosotros no vamos a levantar la mano", expresó el jefe de los legisladores efemelenistas, Salvador Sánchez Cerén, descartando su apoyo a la aprobación del Presupuesto en los términos presentados. Para el partido de izquierda, el gobierno seguiría privilegiando la política de endeudamiento, a lo cual siempre se ha opuesto. "Nos preocupa que sea la vía del endeudamiento la que se haya elegido para reconstruir el país, ya que se está comprometiendo el futuro de la nación", comentó Sánchez Cerén. El Presupuesto de 2002 asciende a 2 mil 504 millones de dólares, es decir, un 13 por ciento más alto que el de 2001. Las áreas de Educación y Salud serán las más favorecidas en la inversión pública. Según Daboub, las fuentes de financiamiento para el presupuesto serían las fuentes de crédito, impuestos, ahorro corriente y reordenamiento de inversiones.

En plano social, el eterno y olvidado problema del agua volvió a cobrar relevancia tras la suspensión del servicio en amplios sectores del Área Metropolitana de San Salvador. Al mismo tiempo, saltaron a la luz pública la falta de coordinación entre los componentes del rubro de vivienda y, por otro lado, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Al iniciar septiembre cobró importancia la discusión surgida en el seno del sector vivienda. Habrían sido, una vez más, los intereses de la empresa privada los detonantes de un debate acerca de la complicada situación del rubro, luego de los terremotos. Como consecuencia de las discusiones surgidas en el marco de ENADE 2001, los diferentes sectores de vivienda plantearon sus puntos de vista ante la situación de "stock" habitacional.

En efecto, hasta abril de 2001, el sector construcción mantenía un inventario de viviendas ya terminadas de 14 mil 415 unidades, a un costo de 149.6 millones de dólares. El presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construc-

ción (CASALCO), Benjamín Trabanino, criticó, a principios de mes, duramente la gestión del Fondo Social para la Vivienda (FSV). "Todo se ha visto minimizado, debido a la burocracia, insensatez y falta de acompañamiento de instituciones como el FSV", denunció. Trabanino también agregó que el "stock" habitacional se debía a que "las medidas como la Ley de Integración Monetaria no han sido acompañadas de las propuestas de ENADE 2000". Sin embargo, el presidente del FSV, Ramiro Mendoza, descartó que la institución haya discutido las propuestas lanzadas por CASALCO en ENADE 2000. Mendoza descartó que le competiera elaborar una política de vivienda, pues su tarea consiste en "facilitar créditos, y la ley nos dice que única y exclusivamente debemos atender a los trabajadores afiliados".

Además, uno de los servicios más vitales y al que se le ha prestado una insuficiente atención ha sido desde años el de agua. El 3, el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANANDA), Carlos Perla, informó que ya se había notificado a todos los ministros cuyas carteras de Estado se vería afectadas por un recorte de servicio del vital líquido en varios municipios de Área Metropolitana de San Salvador. Perla aseguró en la Asamblea Legislativa que el recorte respondía al plan de mejoramiento que se había extendido desde el principio de año y que esta vez se harían modificaciones en las plantas del Río Lempa y de la Zona Norte. Perla se enfrascó en una pelea verbal contra la Procuradora de derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, mientras explicaba a los diputados de la Comisión de Obras Públicas y al alcalde de Nejapa, René Canjura, la situación del recorte. De Carrillo había cuestionado la falta de concertación de Perla en el referido caso. "Él (Perla) es un funcionario público y no tiene la autoridad para negarse a explicar y a concertar", dijo la Procuradora.

El 4, el director departamental de Educación por San Salvador, Ubilfredo Panameño, aseguró que el recorte de agua afectaría a 280 escuelas públicas en el Área Metropolitana, razón por la que se dejó en manos de los directores de cada centro educativo tomar las medidas necesarias, incluso la reducción de horarios. Posteriormente, la ministra de Educación, Evelyn Jacir de Lovo, explicó que unas 408 escuelas de 11 municipios resultarían parcial o totalmente afectadas. De Lovo autorizó a los directores de los centros escolares a suspender

las actividades si ello fuera necesario. Por su parte, el Ministerio de Salud anunció que ya existía un plan contingencial para suplir la demanda de los centros de salud. Para paliar la situación, Además, ANDA ejecutó un plan de contingencia en los lugares afectados, al mismo tiempo que habilitó líneas telefónicas para atender las demandas de la población afectada. Sin embargo, con todo y los esfuerzos de ANDA y la coordinación de las alcaldías involucradas no fueron suficientes para dar abasto a la demanda del vital líquido.

En otro orden, ese mismo día, una nueva suspensión de labores en varias clínicas comunales, hospitales y unidades periféricas del Seguro Social afectó a unos 18 mil derechohabientes, según el subdirector de la institución, Emilio Velasco. La acción fue llevada a cabo por miembros del STISSS, para cuyos líderes las autoridades estarían privatizando algunos servicios que perfectamente podría realizar la bolsa de empleados. "En el instituto tenemos suficiente bolsa de empleados para que realicen el trabajo que la junta directiva está concesionando en otros lugares", manifestó uno de los miembros de STISSS. La suspensión de actividades concluyó al día siguiente, dejando claro que la situación laboral en dicha institución aun no se ha normalizado. Pero, otros aspectos salieron a la luz luego de las declaraciones del subdirector del ISSS, Emilio Velasco, para quien los sindicalistas de la institución sólo se preocupan en su interés propio y no en el de los derechohabientes. "Ellos no están pensando en los derechohabientes. Esa es su bandera. Esa es la idea que venden. En el fondo temen perder sus beneficios y privilegios como sindicalistas al concesionar algunos servicios", aseguró Velasco. El funcionario agregó que la institución gasta 4.2 millones de colones (480 000 dólares) para financiar la labor de los sindicalistas. En total, el ISSS gasta 290 millones 400 mil colones (33.2 millones de dólares) en prestaciones adicionales a toda su planta de empleados. El 11, los sindicalistas del ISSS volvieron a paralizar sus labores en varias clínicas comunales y hospitales del país. Esta vez, la suspensión habría afectado 47 mil atenciones médicas en todo el territorio nacional.

Adicionalmente, septiembre heredó la discusión sobre la regulación de la venta de bebidas alcohólicas. Representantes del gremio de restauranteros se habían presentado a dialogar con el concejo municipal de San Salvador, en un in-

tento por suspender temporalmente la ordenanza municipal que restringe la venta de bebidas embriagantes y que entrara en vigencia en agosto pasado. La discusión llegó hasta la Asamblea Legislativa, desde que el FMLN propusiera, el 5, la creación de una ley nacional que regulara la venta de bebidas alcohólicas. El 7, una ordenanza similar entró en vigencia en el municipio de Nueva San Salvador y posteriormente el tema fue prácticamente ignorado en la prensa nacional.

Para culminar lo social, los jefes edilicios del Área Metropolitana de San Salvador vieron frustrados sus esfuerzos para instalar una planta de reciclaje de basura, luego de la falta del aval de las autoridades de medio ambiente. En efecto, el 20, algunos alcaldes del Gran San Salvador aseguraron que el rechazo a la instalación de una planta de transferencia de basura ubicada en Apopa, por parte del Ministerio del Medio Ambiente (MARN), impactaría negativamente el proceso de tratamiento de la basura. "No sé cómo una ministra de Medio Ambiente puede estar en contra del reciclaje", expresó el alcalde de San Salvador, Héctor Silva. El MARN se había basado en una recomendación hecha por el presidente de ANDA, Carlos Perla, cinco días antes de que se diera la respuesta a las autoridades edilicias. Perla aseguró que su recomendación no tiene que ver con criterios políticos, sino "eminente técnico".

En suma, aunque los atentados en Nueva York y Washington captaron la atención de todos los salvadoreños, ha sido posible señalar una preocupante polarización en estructuras clave de la vida política nacional. Por un lado, sigue siendo alarmante la pugna al interior de las instituciones de justicia del país; por otro, la falta de una alternativa seria al proyecto político arenero —en sí mismo verticalista—, ante el resquebrajamiento del FMLN no permite vislumbrar cambios sustanciales en el horizonte. Precisamente, ARENA —y junto con él la prensa de derecha— ha sabido sacar provecho de las "torpezas políticas" del Frente. Es posible afirmar que los atentados terroristas han sentado una base para posibles asignaciones de cuotas de poder a instituciones como la Fuerza Armada en una etapa histórica en la que es oportuno profundizar la desmilitarización de la vida nacional. Con respecto a lo económico, quedó evidenciada la necesidad de buscar socios comerciales alternativos, dada la dependencia excesiva de la economía nacional respecto de la estadounidense.

Finalmente, la diversidad de las lecturas en El Salvador en torno a los actos terroristas —y los mismos atentados en sí— da pie a reflexionar sobre cuestiones tan capitales como el valor de la vida humana frente a posiciones dogmáticas y fundamentalistas. Pero, para superar las visiones torcidas que se han dado en el país a propósito del terrorismo y los terroristas, debe quedar claro que terrorista no es igual a guerrillero, al igual que tampoco terrorismo es idéntico a movimiento in-

surgente. Sólo por una burda manipulación se puede caer en las identificaciones señaladas. Sesudos analistas políticos salvadoreños, aprovechando la conmoción provocada por los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, se aprovecharon de la situación para realizar las anteriores identificaciones, al tiempo que han sacado a relucir sus resentimientos más hondos. Varios de ellos siguen en guerra, sólo que ahora su ferocidad está al servicio del bando opuesto.

